**SEÑOR
JUEZ CIVIL CIRCUITO- REPARTO
BELLO**

REFERENCIA:	ACCION DE TUTELA
ACCIONANTE:	PAULA ANDREA PUERTA VARGAS
ACCIONADOS:	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

PAULA ANDREA PUERTA VARGAS, Mayor de edad, vecina de Bello, identificada con la cedula de ciudadanía número 43.927.419 de Bello, actuando en nombre propio; de la manera más respetuosa acudo a usted, Señor Juez Civil del Circuito, para incoar **ACCIÓN DE TUTELA** en contra de **LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA**, quienes sean titulares al momento de la notificación de esta acción de amparo, por las actuaciones administrativas realizadas por estas entidades, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, los Decretos 2591 de 1.991, 306 de 1.992 y 1382 de 2.000 y demás normas concordantes, para que, luego de surtirse el trámite establecido, se conceda protección inmediata de los derechos fundamentales al **DEBIDO PROCESO** (Artículo 29 de la Constitución Política), **PRINCIPIO DE LEGALIDAD** y a la **PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL**, así como el **DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY**, y así se logren restablecer los derechos del accionante

Para tal efecto formulo las siguientes pretensiones, las que fundamentaré fácticamente en el apartado correspondiente.

HECHOS

1º. El día 10 de enero de 2020, me inscribí para participar en la convocatoria de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - PROCESO DE SELECCIÓN TERRITORIAL 2019 - ALCALDIA DE BELLO, para agente de tránsito.

2º. Dentro de los documentos por mi aportados estaba la certificación (constancia) del 04 de diciembre de 2019, en donde LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE BELLO, hace constar que:... ***"La señora PAULA ANDREA PUERTA VARGAS, identificada con cedula de ciudadanía 43.927.419, labora en la Entidad desde el 14 de julio de 2009 a la fecha, desempeñándose como: AGENTE DE TRANSITO CODIGO Y GRADO 340-03. EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD; EN PROVISIONALIDAD" ...***

3º Mediante comunicación del 04 de agosto de 2020, (Publicación de resultados de **ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS**) la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, con ocasión a dicha convocatoria considera que no está clara la acreditación del tiempo de servicio por mi prestado para demostrar la experiencia mínima, ya que pese a ser un documento digital considero la COMISIÓN que faltaba la firma de quien lo expide es decir de la directora Administrativa de talento humano del municipio de Bello.

4º. Posteriormente concretamente el día 05 de agosto de 2020, y dentro del término legal LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE BELLO, hace constar mediante acta o resolución que yo me desempeño desde el 14 de julio de 2009, a la fecha (05-08-2020) como agente de tránsito, código y grado 340-03; comunicación esta que fue aportada al portal web de www.simo.cnsc.gov.co el día 05 de agosto de 2020 incluso con la respectiva firma de la directora en mención.

5º. En el mismo trámite Mediante comunicación del 31 de agosto de 2020, Respuesta a Reclamación por no tenerme en cuenta la documentación por mi aportada, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**, mediante documento a mi dirigida en proceso de verificación de requisitos mínimos; esta considera que no cumplo requisitos inicialmente por que el cargo al cual aspiro requiere Experiencia Relacionada, y adicionalmente considera que la certificación aportada no contiene firmas que avalen el contenido de la misma pese a ser un documento digital emanado de una entidad publica.

6º De la anterior apreciación me aparto ya que considero que las fechas relacionadas en ambas constancias la del 26 de noviembre de 2019 y la del 05 de agosto de 2020, ambas de LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE BELLO, detallan con claridad el tiempo servido y la función desempeñada y el último de ellos fue aportado con la correspondiente firma de la directora, así mismo es preciso indicar que la certificación por mi aportada expedida por Municipio de Bello, muestra con exactitud los periodos en los cuales me desempeñé en el cargo de agente de tránsito, pues el documento señala un periodo de experiencia comprendido entre el 14/07/2009 a la fecha (04-12-2019). Es por ello que de esa información es predicable que el cargo en mención efectivamente fue ejercido por mi desde la fecha inicial, pues se hace claridad que dicho empleo lo ejercía al momento de expedición del certificado.

7º Dentro de la misma convocatoria, fueron admitidos por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, compañeros que al igual que yo se desempeñan y se han desempeñado como agentes de tránsito, concretamente la compañera DAYANA PATRICIA IBAÑEZ GARCIA C.C. 1.020.445.534 y posteriormente JOSE FERNANDO MUÑOZ MORALES C.C. 98.489.736, cuya certificación emitida por LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE BELLO, para acreditar requisitos, fue expedida exactamente igual, es decir en los mismos términos que la por mi aportada.

8º En el marco de las convocatorias 990 a 1131,1135,1136,1306 a 1332 de 2019- Territorial 2019, la COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL suscribió contrato número. 640 del 2019, con LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE ÁREA ANDINA, para desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa.

9º Ordena la Ley 527 de 2009, y su Decreto Reglamentario 2364 de 2012, dar pleno reconocimiento y validez jurídica a los documentos generado con firma electrónica, razón por la cual no entiende la suscrita el desconocimiento de este imperativo legal por parte de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE ÁREA ANDINA.

PRETENSIONES

Con base en los hechos antes narrados y en las consideraciones que igualmente sostendré, solicito que se TUTELEN mis derechos fundamentales como accionante, que me han sido vulnerados (*debido proceso, legalidad y prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones administrativas*), igualdad por las autoridad accionada, en los siguientes o similares términos:

PRIMERO: Declarar la pérdida de validez de lo actuado y/o dejar sin efecto la resolución por medio de la cual **la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NO ADMITIÓ a PAULA ANDREA PUERTA VARGAS** identificada con cedula de ciudadanía **43.927.419**, de la convocatoria PROCESO DE SELECCIÓN TERRITORIAL 2019 - ALCALDÍA DE BELLO, para agente de tránsito, para que, en su lugar, se REVOQUE en toda su integridad, por existir en ellos una violación al principio de legalidad, debido proceso, defectuosa valoración de las

pruebas, Igualdad ante la ley y demás defectos (error inducido, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente).

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, **ORDENAR** que se profiera resolución permitiendo la partición de **PAULA ANDREA PUERTA VARGAS** identificada con cedula de ciudadanía **43.927.419** en la convocatoria PROCESO DE SELECCIÓN TERRITORIAL 2019 - ALCALDIA DE BELLO, para agente de tránsito.

CONSIDERACIONES, REQUISITOS GENERALES Y ESPECIALES DE PROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

Ahora bien, como se ha enunciado en otras oportunidades, la acción de tutela tiene un carácter subsidiario. El fundamento de esta subsidiariedad es el de reconocer que la tutela evidentemente no es una instancia más en el tránsito jurisdiccional, ni tampoco un camino extraordinario para solucionar las eventuales falencias de los procesos ordinarios o contenciosos, sino un camino concebido exclusivamente para la protección de los derechos fundamentales de las personas.

Por lo tanto, esta acción sólo es procedente ante situaciones en que no exista otro mecanismo judicial apto para garantizar un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando existiendo algún otro mecanismo, este no resulte tan eficaz para la defensa de estos derechos de los asociados como la tutela, al punto de colocar a la persona que alega la vulneración o amenaza, frente a un perjuicio irremediable.

En materia judicial, la autonomía e independencia jurisdiccional, la seguridad jurídica y la cosa juzgada, son principios procesales claramente reconocidos y avalados constitucionalmente. Sin embargo, estos principios pueden ceder eventualmente, frente a la vulneración de derechos fundamentales, en el evento de que autoridades jurisdiccionales controviertan los derechos enunciados a través de sus decisiones, sea porque actúan arbitraria o caprichosamente¹ o porque actúan en abierta contradicción con normas constitucionales o legales aplicables al caso.

Así, la acción de tutela resulta procedente frente a una decisión judicial que conculque derechos fundamentales, cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad, generales y los especiales² necesarios para que la acción pueda ser válidamente conocida por el juez de tutela. Los primeros requisitos, es decir, aquellos de procedibilidad generales, exigen para que sea viable la acción de tutela contra la providencia cuestionada: a) que no exista otro u otros medios de defensa judiciales (recursos ordinarios o extraordinarios) como se ha visto, y b) que exista una relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad³. Este requisito significa que no procede la acción de tutela contra sentencias judiciales, cuando el paso del tiempo es tan significativo y elocuente, que resulta claramente desproporcionado en un momento determinado un control constitucional de la actividad judicial, por la vía de la acción de tutela⁴. Los requisitos de procedibilidad especiales, por otra parte, están asociados directamente al control excepcional por vía de tutela de la actividad judicial en sí misma considerada, y tienen que ver específicamente con el concepto de vía de hecho. En la sentencia T-462 de 2003⁵, se sintetizaron con claridad cuáles son estos supuestos de la vía de hecho, así:

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

² Esta clasificación se estableció a partir de la sentencia T-441 de 2003, reiterada en las sentencias T-461, T-462, T-589, T-685 de 2003 y T-606 de 2004.

³ Corte Constitucional. Sentencia T-606 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

⁴ Ibídem.

⁵ Corte Constitucional. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

“En primer lugar, se encuentran los casos en los cuales la violación de la Constitución y la afectación de derechos fundamentales es consecuencia del desconocimiento de normas de rango legal o infralegal, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes. Estas situaciones corresponden a los denominados por la Jurisprudencia constitucional defectos sustantivo, orgánico y procedimental como circunstancias que afectan la juridicidad de las providencias judiciales.

En segundo lugar, se encuentran aquellos casos en los que la vulneración de los derechos fundamentales se presenta con ocasión de problemas severos relacionados con el soporte probatorio de los procesos, como cuando se omiten la práctica o el decreto de pruebas, o cuando se presenta una indebida valoración de las mismas por juicio contraevidente o porque la prueba es nula de pleno derecho. Estas situaciones han sido definidas por la Corte como vicios de las providencias conocidos como constitutivas de un defecto fáctico.

A partir de la identificación de estos defectos se definió originariamente el concepto de vía de hecho judicial y se construyó una dogmática más o menos comprensiva de las hipótesis de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, teniendo siempre como punto de referencia el concepto de vía de hecho. Sin embargo, de la evolución jurisprudencial en la materia a estas hipótesis vendrían a sumarse otras que han venido a incorporar el nuevo listado de causales de procedibilidad en comento.

Así, en tercer lugar, se encuentran las situaciones en las cuales la violación de los derechos fundamentales por parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en error de que es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración de justicia, lo que corresponde a lo que la jurisprudencia ha denominado vía de hecho por consecuencia (Sentencia SU-014 de 2001).

En cuarto lugar, se encuentran las situaciones en las cuales la providencia judicial presenta graves e injustificados problemas en lo que respecta a la decisión misma y que se contraen a la insuficiente sustentación o justificación del fallo (Sentencia T-114 de 2002) y al desconocimiento o la inadvertencia del precedente judicial en la materia.

En quinto lugar, se encuentran las situaciones en las cuales el juez incurre en una violación directa de la Constitución y desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes. Se trata de los casos en los cuales la decisión del juez se apoya en la interpretación de una disposición en contra de la Constitución (Sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001) o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se presente solicitud expresa de su declaración, por alguna de las partes en el proceso (Sentencia T-522 de 2001).

Para la Corte, es claro que en todas estas situaciones la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones judiciales está condicionada a la existencia de una violación de un derecho fundamental (Art. 86 Superior) como quiera que no fue otro el propósito del constituyente al crear la acción de tutela y al consagrar entre los principios fundamentales del Estado el de la eficacia de los derechos fundamentales (Art. 2 Superior).”

Ahora bien, se ha reconocido a su vez, que las providencias cuyas críticas versan sobre la interpretación y aplicación del derecho, no pueden en principio ser objeto de control constitucional en sí mismas por vía del amparo, si en ellas no se configura uno de los requisitos de procedibilidad- mencionados, producto de una actuación abiertamente*

caprichosa frente al orden jurídico por parte de la autoridad judicial, que genera la violación de derechos fundamentales⁶.

Dentro del contexto expuesto, la Corte ha sostenido que no toda discrepancia interpretativa implica, prima facie, la ocurrencia de una vía de hecho. Las posibles diferencias de interpretación, sustentadas en un principio de razón suficiente, no pueden ser calificadas entonces como tales, pues, la eventual disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica un desconocimiento per se de la juridicidad⁷. De ahí que sea insuficiente acusar una decisión judicial con el simple criterio de que la interpretación del fallador en un caso concreto no es una interpretación compartida por las partes o por quien lo revisa⁷, precisamente por respeto del principio de autonomía e independencia judicial y la potestad que tiene el operador jurídico de valorar cada caso acorde a la sana crítica.

En ese sentido, la autonomía judicial se protege como principio general, cuando en materia de interpretación se han expuesto consideraciones razonables, proporcionales y debidamente fundadas para la toma de decisiones por parte de los jueces de instancia. Solo podrían ser considerados como límites a la interpretación judicial autónoma, -evaluables ciertamente en cada caso concreto- la falta de razonabilidad, proporcionalidad, y la ausencia del deber de la debida fundamentación, de un lado, y la negativa de respeto a los precedentes⁸ horizontales y verticales, del otro, como se ha expuesto en otras oportunidades por esta Corporación. También el principio de supremacía de la Constitución, que obliga a todos los jueces a interpretar el derecho en compatibilidad con la Constitución¹⁰, es entonces igualmente un límite, a la autonomía judicial.⁹

b. Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio.

Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite considerar elementos probatorios que constan en el proceso, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión y, en el caso concreto, resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido habría variado sustancialmente."

Igualmente, en la sentencia T-902 de 2005, con ocasión de la revisión de una acción de tutela incoada contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional encontró que se configuraba un defecto fáctico por ausencia de valoración probatoria, debido a que no se habían valorado en segunda instancia pruebas documentales decisivas para resolver las pretensiones de la demandante. Al respecto se sostuvo:

"Las pruebas anteriores, no fueron valoradas por la sentencia de segunda instancia y a juicio de esta Sala son determinantes para concluir, precisamente en lo que debía, a juicio de la sentencia cuestionada, probarse en el proceso de nulidad para poder demostrar la motivación oculta del acto administrativo que declaró la insubsistencia del cargo de la accionante.

⁶ Corte Constitucional. Sentencia T-462 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

⁷ Corte Constitucional. Sentencia. C-836/2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil

⁷ Corte Constitucional. Sentencia. T-073/97 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

⁸ Corte Constitucional. Sentencia. T-688 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

¹⁰ Corte Constitucional. Sentencia T-688 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

⁹ En materia laboral, por ejemplo, la Corte ha señalado que so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable al operador jurídico desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad. Ver Sentencia T-001/99. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-800/99, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-688 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

- Los defectos del análisis probatorio, no menos que la falta de relación entre lo probado y lo decidido, vulneran de manera ostensible el debido proceso y constituyen irregularidades de tal magnitud que representan vías de hecho, como ya se indicó. Es el caso de la sentencia cuestionada, que se apartó por alguna circunstancia del material probatorio, no lo evaluó en su integridad, lo ignoró y plasmó en su sentencia un supuesto diferente al que le ofrecía el bloque de pruebas. Por los hechos relatados, se comprobó que el acervo probatorio fue analizado de manera que de ser tenida en cuenta la prueba en comento, cambiaría el sentido del fallo atacado.

- Es claro entonces, que el juicio valorativo de la prueba que la sentencia no analizó es de tal entidad que cambia el sentido del fallo: (i) porque es una prueba concluyente en la demostración de la posible desviación de poder que se alegaba en el proceso de nulidad y (ii) amén de lo anterior, es la prueba que la sentencia atacada construye como hipótesis para demostrar el desvío de poder, por ello, no existe duda de que era un documento determinante en las resultas del proceso de nulidad y restablecimiento que se discutía en segunda instancia en el Consejo de Estado. En consecuencia, al pie de la jurisprudencia de esta Corporación, se configuró una vía de hecho en tanto la falta de consideración de un medio probatorio conlleva una vía de hecho siempre y cuando ésta determine un cambio en el sentido del fallo."

Con posterioridad, en la sentencia T-162 de 2007, la Sala Primera de Revisión decidió la tutela impetrada contra una providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda en un proceso de reparación directa. El órgano judicial, si bien había declarado administrativamente responsable al Seguro Social por el fallecimiento del señor Luís Mauricio Antonio Acevedo Ocampo, en la providencia cuestionada no había reconocido perjuicios materiales, porque, a su juicio, no se habían aportado pruebas concluyentes sobre la actividad económica del occiso. Consideró la Sala de Revisión que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, desconocía pruebas debidamente aportadas al proceso y adicionalmente se apartaba de las reglas de la sana crítica. Sobre el primer extremo sostuvo:

"La Corte observa, que efectivamente al proceso contencioso administrativo por reparación directa, instaurado por Diana Cecilia Cardozo Cárdenas y otros, en contra del Seguro Social el 22 de octubre de 2003, en el cual mediante sentencia del 31 de marzo de 2006, se declaró la responsabilidad administrativa de la entidad demandada, por el fallecimiento del señor Luís Mauricio Antonio Acevedo Ocampo, producto del inadecuado manejo médico hospitalario que recibió para tratar el cuadro de apendicitis del cual fue víctima; fue aportada una constancia laboral, expedida por la firma Suagro Eat, en la que se da cuenta de que el señor Acevedo Ocampo, antes de su fallecimiento, laboraba como ingeniero agrónomo, con una asignación salarial mensual de dos millones novecientos siete mil pesos (\$2.907.000,00) M/cte., documento cuya veracidad fue admitida por la parte demandada en dicho proceso, en la contestación de la demanda, sin que se solicitara en momento alguno, su ratificación.

Por otra parte, de conformidad con el numeral 2º. Del Art. 10 de la Ley 446 de 1998, concordado con el numeral 2º. Art. 277 del C. de P. C., modificado por la Ley 794 de 2003, no era menester la ratificación de tal certificación laboral para que el Tribunal realizara su valoración como elemento determinante en su decisión final, de manera que, ante la aceptación del ente demandado en el proceso contencioso, consecuente resultaba su admisión como prueba del valor de los recursos económicos percibidos por el señor Acevedo Ocampo. Ahora que, si la misma le proporcionaba dudas, le estaba permitido, al Juez de conocimiento, decretar una prueba oficiosa conforme con los mandatos del Art. 169 del C.C.A.; sin embargo, no lo hizo, pero sí trasladó a los actores los efectos adversos de su inactividad.

Pero en el peor de los casos, si en efecto el órgano sentenciador hubiese carecido de un elemento real de convicción que le indicara el valor de los ingresos percibidos por el extinto padre de familia, el cual sí obraba en el proceso, de acuerdo con abundante jurisprudencia del Consejo de Estado en tales circunstancias, podía presumir un ingreso mensual igual a un salario mínimo legal, por lo que esta Sala de Revisión concluye, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda contaba con suficientes herramientas para tasar el valor de los perjuicios materiales, cuya ocurrencia estaba demostrada con el acervo probatorio".

c. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio.

Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.

Ello se presenta en hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, como en el caso de la sentencia T-450 de 2001, en el que un juez de familia en un proceso de aumento de cuota alimentaría, en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió aumentarle la cuota alimentaría al demandado. En lo pertinente se dijo en dicha providencia:

"En el proceso que ahora es objeto de revisión, no se aprecian las pruebas y razones que justifiquen la decisión tomada por el Juez 15 de Familia de Bogotá, pues aunque la materia sobre la que versa el proceso –aumento de cuota alimentaría– compromete principios centrales dentro de la organización social (ver la protección del menor, la vigencia del principio de solidaridad, el valor de la justicia y la equidad), que, en principio, alentarían una postura activa por parte del juez competente con el propósito de proteger integralmente los derechos de un menor, su acción no puede estar absolutamente desligada de las pruebas allegadas o decretadas dentro del proceso –en esta oportunidad, las presentadas por la madre–. Así, todo reconocimiento superior a las sumas probadas dentro del proceso, e incluso a los derechos alegados, debe estar plenamente sustentada, so pena de convertir a la decisión judicial en un acto arbitrario que tiene un grave vicio fáctico y lesiona los derechos de la parte vencida en el juicio –en este caso el señor Apóstol Espitia Beltrán–.

En el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de aumentar la cuota alimentaría de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso que se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió conocer de la tutela, cuando afirma que: "a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio, contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera ostensiblemente el debido proceso". Por estas razones el fallo de instancia será confirmado."

Igualmente tienen cabida en el supuesto bajo estudio, los eventos en los cuales el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte dentro del proceso. Un caso de esta naturaleza fue examinado por la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-1065 de 2006 en la cual se cuestionaba, por vía de tutela, la providencia proferida por un Tribunal de Distrito, mediante la cual denegaba el reconocimiento de

una pensión de invalidez al actor, debido a que se había acreditado dentro del proceso el pago de la indemnización sustitutiva. A juicio de la Sala de Revisión, esta providencia adolecía de un defecto fáctico porque:

"Considera la Sala que en el presente asunto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de la ciudad de Cúcuta se abstuvo de tener en cuenta la certificación emitida por el Banco Agrario o para decirlo en otras palabras: el Tribunal dio por probado un hecho sin estarlo. Al hacerlo, no sólo cometió un error ostensible, flagrante y manifiesto en la valoración de la prueba sino que esa omisión incidió de manera directa en la decisión final pues por ese motivo el Tribunal resolvió negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Resulta, pues, evidente que al dar por probado el juzgador un hecho sin estarlo, cambió por entero el sentido del fallo y vulneró la garantía del derecho al debido proceso del peticionario. En este caso se trataba de una prueba concluyente orientada a establecer que el pago de la pensión sustitutiva no había tenido lugar. Esta prueba habría conducido al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta a ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitados por el actor – tal como se deriva de la argumentación utilizada por el Tribunal en la sentencia y como se desprende de la jurisprudencia citada por esa Corporación en apoyo de la misma".

En la sentencia T-162 de 2007, a la cual ya se hizo alusión en el acápite precedente, además de encontrar que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda no valoraba las pruebas allegadas al proceso sobre la actividad económica del fallecido, la Sala Primera de Revisión encontró que la providencia atacada en sede de tutela también se apartaba de las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria. Al respecto sostuvo:

(...)

Así pues, es factible fundar una acción de tutela frente a una vía de hecho por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia, es manifiestamente equivocada o arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba "debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia".¹²

Sin ahondar más en la posibilidad de instaurar acciones de tutela en contra de providencias judiciales, me detendré a hacer explícitas las condiciones generales y especiales de providencia a raíz de la nueva concepción decantada, lo cual se hará a partir de las sentencias T-429 de 2.011 y C-590 de 2.005.

Es una cuestión de "**relevancia constitucional**", al punto que, se tocan tópicos eminentemente constitucionales: violación de los derechos fundamentales del señor **PAULA ANDREA PUERTA VARGAS**, entre otras cuestiones. El *agotamiento de todos los recursos de defensa* al alcance del afectado, esto es, debido a que la vía de hecho se verificó en una decisión, sin más recursos.

En cuanto a la *Inmediatez*, también se cumple, pues tanto ambas decisiones que se impugnan por este medio constitucional, es decir, se hizo dentro de un término razonable, oportuno y justo, además el expediente se halla en la secretaría jurídica adscrita LA ENTIDAD ACCIONADA, lo cual se podrá constatar fácilmente.

Se plasma en las resoluciones que ahora se recurren que ahora se recurre en Acción de Tutela una serie de irregularidades procesales (indebida valoración de la prueba y falta

absoluta de valoración de la misma), que vulneran los derechos fundamentales de la demandante y que ameritan la intervención del Juez de Tutela. Se indicaron, de manera razonada, los puntos de inflexión en los que se presentan las vías de hecho. Y, finalmente, no se trata de una sentencia de tutela.

En cuanto las condiciones específicas, se dirá que en el presente asunto, consideramos, que se presentan los siguientes defectos: fáctico¹³, error inducido¹⁴, decisión sin motivación¹⁵ y desconocimiento del precedente¹⁶.

En la valoración de las pruebas contenidas en las decisiones censuradas se advierten serias deficiencias que son determinantes de la conclusión a la que llegó el inspector y su superior de instancia, tal como se describió en los Hechos de la presente acción de amparo.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento le manifiesto que por los mismo hechos y derechos no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial en nombre y representación de mi apoderada.

DERECHO Y JURISPRUDENCIA

Solicito H. Jueces del Circuito que se tengan como fundamentos jurídicos y jurisprudenciales los siguientes: los artículos 29, 86 y 228 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1.991, el Decreto 306 de 1.992 y el Decreto 1382 de 2.000 y demás normas concordantes; las Sentencias de la Corte Constitucional que fueron citadas a lo largo de esta intervención.

PRUEBAS Y ANEXOS

En orden a establecer la violación a los derechos fundamentales, cuya protección invoco, solicito se sirva tener como tales las que enlistaré, las cuales reposan en el trámite administrativo adelantado por mi ante la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.

Documentales:

1º. Copia c.c. accionante.

2º. Constancia de inscripción en la convocatoria de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - PROCESO DE SELECCIÓN TERRITORIAL 2019 - ALCALDIA DE BELLO, para agente de tránsito.

3º. Certificación (constancia) del 04 de diciembre de 2019, de LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE BELLO.

4º. Comunicación del 04 de agosto de 2020, (Publicación de resultados de **ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS**) de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.

5º. Certificación (constancia) del día 05 de agosto de 2020, de LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE BELLO.

6º Constancia de aporte de documentos y certificación.

7º. comunicación del 31 de agosto de 2020, Respuesta a Reclamación de la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.**

NOTIFICACIONES

Accionada: Carrera 16 No. 96 - 64, Piso 7 - Bogotá D.C., Colombia

Cordialmente,

PAULA ANDREA PUERTA VARGAS
C.C. 43.927.419